



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05360-31-05-002-2020-00145-01
Demandante:	Juan Guillermo Posada Llano, John Bayron Bedoya Mejía y Jonathan Andrey Jiménez Correa
Demandado:	Industrias Médicas Sampedro S.A.S.
Asunto:	Apelación sentencia
Procedencia:	Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Contrato realidad, prestaciones sociales, aportes seguridad social

**Medellín, julio veintinueve (29) de dos mil veintidós (2022)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, el 24 de febrero del año 2022, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por los señores JUAN GUILLERMO POSADA LLANO, JOHN BAYRON BEDOYA MEJÍA y JONATHAN ANDREY JIMÉNEZ CORREA en contra de INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S. Radicado 05360-31-05-002-2020-00145-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

Los señores JUAN GUILLERMO POSADA LLANO, JOHN BAYRON BEDOYA MEJÍA y JONATHAN ANDREY JIMÉNEZ CORREA convocaron a juicio laboral a INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S., pretendiendo se declare que entre ésta, en calidad de empleadora, y los demandantes existió un contrato laboral a término indefinido, en los siguientes extremos JUAN GUILLERMO POSADA LLANO, del 10 de diciembre de 2016 al 21 de diciembre de 2018; JOHN BAYRON BEDOYA MEJÍA, del 03 de diciembre de 2015 al 21 de diciembre de 2018 y JONATHAN ANDREY JIMÉNEZ CORREA del 19 de diciembre de 2016 al 19 de diciembre de 2018; se declare que INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S, decidió terminar el contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa a los trabajadores; se declare que bajo el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, los accionantes prestaron sus servicios de manera personal, continúa y subordinada, elementos propios de una relación laboral, en las mismas condiciones de los trabajadores de planta de INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO SAS. En consecuencia se condene INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO SAS, a pagar a favor de los trabajadores el valor de la cesantía; intereses a las cesantías, indemnización por el no pago del interés de la cesantía, las primas de servicio; las vacaciones; a pagar la diferencia entre el valor cotizado por los demandantes para el sistema general de salud y pensiones y el valor que la entidad demandada debió cancelar por su trabajador, con base en los salarios devengados durante la vigencia de la relación laboral; se condene al pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, desde la terminación del contrato y hasta la fecha del pago efectivo de las prestaciones adeudadas, al pago de la indemnización por terminación del contrato de trabajo por despido injustificado, conforme al artículo 64 inciso 4 literal a) numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo; al pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, tal como lo establece el artículo 99 de la Ley 50 del 1990 y la indexación de las condenas.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S, contrató mediante la modalidad de contrato civil de prestación de servicios a los demandantes en los extremos antes citados, para prestar los servicios de transporte de dispositivos médicos, que el lugar de prestación de servicios fue la sede ubicada en la carrera 47 No. 100 sur 40, Centro Industrial Portal del Sur Bodega 14, variante Caldas sector la Tablaza-La Estrella, con desplazamientos dentro o fuera del oriente cercano y la ciudad de Medellín, las funciones realizadas, consistían en: transportar equipos o dispositivos médicos, rendir informes, recoger y descargar los dispositivos diariamente, asistir a reuniones, realizar registro fotográfico en la entrega y recogida de los elementos médicos.

Se expone que las órdenes que debían ejecutar, estaban sujetas a una continuada dependencia y subordinación impartida por Daniel Restrepo Muñoz (Coordinador de logística de Despacho) y Oscar De La Cruz, ambos actuaban en calidad de representantes del empleador, además ejercían control en el horario de entrada y salida, a través de huella digital, le realizaban periódicamente evaluación de desempeño, exigían documentación al día, reportes de cargue y descargue de los elementos transportados al igual que fotografías, exigían exclusividad en la prestación del servicio, el cual no podía delegarse a un tercero; la remuneración pactada por el tiempo de la prestación de servicios fue variada, las labores encomendadas fueron ejecutadas de manera personal, atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con el horario impuesto por éste, de lunes a sábados con horario de ingreso a las 5:00 am y el horario de salida era 4:00 PM.

Se aduce que INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S, en su calidad de empleador, no les canceló a los demandantes, durante la relación laboral ni después de terminada, los salarios y prestaciones sociales, ni tampoco les ha cancelado la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa; los aportes al sistema general de seguridad social, ni la indemnización moratoria, por no pago oportuno de sus derechos laborales.

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, oportunamente **INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.**, dio respuesta al libelo introductorio, oponiéndose a las pretensiones, por cuanto la vinculación jurídica de los accionantes se dio mediante un acuerdo de suministro de transporte, donde cada transportador con sus equipos, en autonomía técnica, se obligó a llevar a un destinatario cosas a cambio de un precio acordado que se denomina flete, asevera que los demandantes ejercían la actividad de comerciantes, mediante el suministro de transporte de cosas, con un vehículo de su propiedad a cambio de un precio estipulado, razón por la cual no nacen prestaciones propias del contrato de trabajo, aduce que del contrato de suministro de transporte finalizó con aviso previo de quince (15) días calendario y que al encontrarse en discusión la naturaleza de la relación jurídica, por un contrato diferente al que las partes acordaron, es necesario que el Juez analice el comportamiento contractual frente a la buena fe.

Para enervar las pretensiones formuló las excepciones de pago; ausencia de derecho sustantivo; falta legitimación en la causa y prescripción

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 24 de febrero de 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que entre los señores JUAN GUILLERMO POSADA LLANO, JHON BAYRON BEDOYA MEJÍA, JONATAN ANDREY JIMÉNEZ CORREA y la sociedad INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S existió un contrato de trabajo desde 10 de diciembre de 2016 y el 21 de diciembre de 2018, entre el 3 de diciembre de 2015 y el 21 de diciembre de 2018 y del 4 de abril de 2016 al 19 de diciembre de 2018, respectivamente; condenó a la demandada a pagar a las siguientes sumas: a JUAN GUILLERMO POSADA \$6.003.795 por cesantías, \$2.713.715 por intereses a las cesantías doblados, \$5.560.892 por prima de servicios, \$3.001.897 por vacaciones, \$4.986.102 por indemnización por despido injusto; a JHON BAYRON BEDOYA \$8.631.607 por cesantías, \$3.901.486 por intereses a las cesantías doblados, \$5.325.050 por prima de servicios, \$4.033.058 por vacaciones, \$6.696.368 por indemnización por despido injusto; a JONATAN ANDREY JIMÉNEZ \$5.823.776 por cesantías, \$2.624.582 por intereses a las

cesantías doblados, \$4.033.681 por prima de servicios, \$2.911.888 por vacaciones; condenó a la demandada a reconocer y pagar la indexación de las condenas y a reajustar los aportes a pensión de los demandantes, de conformidad con la tabla anexa; absolvió de las demás pretensiones; dispuso que las excepciones quedan implícitamente resueltas en lo debatido en el proceso, declarando probada parcialmente la de prescripción; finalmente condenó en costas a la parte demandada y fijó las agencias en derecho en un 7.5% del valor de las condenas.

#### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

##### ***Demandante***

Interpone el recurso de apelación en forma parcial, en primer lugar, respecto a la negativa de la condena de las sanciones moratorias del artículo 65 y el artículo 99 de la ley 50 de 1990, de los tres demandantes, observado que la demandada no obró de buena fe y no se logró acreditar que su actuar está revestido de la misma.

Argumenta que no basta que se afirme que se obró de buena fe y que se alegue la existencia de un contrato de naturaleza diferente y como sustento invoca la sentencia SL 1588 del 2013, argumenta que quedó debidamente acreditado que la demandada efectuó una subordinación continuada, les imponía horarios, órdenes permanentes, evaluaciones de desempeño y los calificaba, así lo prueba la documental y el testigo de la accionada, si el demandado siempre ejerció ese poder subordinante no es posible que haya actuado de buena fe y haya considerado que era un contrato civil y no un contrato de trabajo. Por lo que solicita se revoque la absolución

El segundo punto en el cual formula recurso lo es la negativa al pago de la indemnización por despido sin justa causa del señor Jonathan Andrey Jiménez, aduciendo que no comparte la conclusión que no existe prueba de la terminación, porque con la prueba testimonial y el interrogatorio al representante legal, se acredita que de manera unilateral Industrias Medicas Sampedro, fue quien decidió terminar los contratos, no se configura ninguna de las justas causas para terminar

el contrato y al probarse el contrato realidad debió condenarse al pago de la indemnización por despido sin justa causa.

### ***Demandada***

Interpone el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, atendiendo la ley 1149 de 2007 en lo esencial y necesario.

Inicia argumentando que en todo acto jurídico sea unilateral o bilateral existe una subordinación general que ata y vincula a las partes con obligaciones recíprocas, sea trabajador, sea transportador, sea profesional independiente, sea un arrendamiento de servicios, sea en una compraventa o una donación, aduce que no se niega que los transportadores tenían obligaciones con la demandada como cumplir horarios, llevar los bienes del remitente al destinatario, atender su entrega, hacer las devoluciones, cumplir las normas de seguridad como transportador y esa subordinación general desde el contrato de suministro no los convierte en un trabajador con la subordinación propia del derecho laboral, que faculta al empleador para disponer de la calidad y cantidad de trabajo en todo momento.

De un análisis de los interrogatorios y la indivisibilidad de la confesión, se tiene que los demandantes eran propietarios del vehículo, corrían con los gastos, y con el resultado del transporte, podían hacerse reemplazar cuando otro no llegaba, decían que día no prestaban el servicio, sin que estos los convirtiera en trabajador subordinado, se anunciaban como comerciantes, presentaban factura como comerciantes y recibían un ingreso donde tenían que correr con el riesgo económico del sostenimiento de su actividad mercantil de sostener la herramienta del transportador que era el vehículo con todos sus elementos.

Expresa que no se probó el salario y que los extractos bancarios aportados por la parte demandada son un documento en blanco debieron haber sido aceptados de manera expresa por la parte demandada, situación que en este proceso no

ocurrió. Asegura que en el proceso se debate una relación laboral, unos salarios, prestaciones sociales y vacaciones considerando que se debe revocar la condena.

Frente al pago de la indemnización por la terminación del contrato a los demandantes Posada y Bedoya, esgrime que aquello que no existe, que nunca fue laboral porque no había la subordinación propia del contrato de trabajo y esto sale desde la prueba objetiva que es el documento y del interrogatorio de parte, no se termina, razón por la cual se debe revocar la indemnización por terminación del contrato, consecuencia de revocar la sentencia para absolver a la demandada no debe existir indexación.

Finalmente, expresa, con relación a las agencias en derecho, que, aunque están manifestadas en la sentencia para ser liquidadas en un acto interlocutorio al final del proceso, por la unidad de la concentración de la actuación, debe manifestar que, en un proceso laboral, cuando no todas las pretensiones prosperaron no se deben imponer las agencias en derecho por el máximo de la tabla.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de las partes. El extremo activo de la relación procesal solicita al despacho desestime el recurso de alzada interpuesto por la sociedad demandada y se confirme la condena al pago de los derechos laborales que le fueron reconocidos a los demandantes, aduciendo que quedó demostrado que sus poderdantes estuvieron subordinados de manera permanente a las órdenes impartidas por la sociedad demandada, igualmente, reitera los argumentos de la apelación, solicitando se revoque parcialmente la decisión condenando a la demandada al pago de la sanción moratoria contenida en el artículo 65 del C.S.T., por cuanto INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S., no logró acreditar al interior del plenario, que su actuar en la ejecución de la relación laboral y el no pago de la prestaciones debidas al momento de terminación de la relación laboral, estuvo ajustada a un comportamiento de buena fe. Respecto al despido del señor

Jonathan Jiménez agrega que se trata de una afirmación indefinida negativa que en ningún momento fue desvirtuada por la sociedad demandada.

Por su parte la persona jurídica demandada se remite a los argumentos de defensa respecto a la naturaleza civil del contrato de transporte, puntualizando que, de la prueba documental aportada por los demandados, no se infiere contrato laboral, reiterando la realidad de un contrato de suministro de transporte, donde los demandantes aportan las planillas de aportes a la seguridad social, las cuentas de cobro a la empresa y suscriben un contrato de prestación de servicios. Asegura que no existió la intención de los contratantes de suscribir una relación contractual de tipo laboral, desde la firma sabían y conocían que este contrato no era laboral, lo dice el texto, es un contrato de los muchos que la empresa celebra en desarrollo de su objeto social, por lo tanto el principio consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, rige la relación contractual; en cuanto a la prueba testimonial aportada, y tachada desde la respuesta de la demanda, asegura que no debe tenerse en cuenta los testimonios, ya que los testigos son demandantes contra la empresa con el mismo interés en el resultado de este proceso (artículo 58 C.P.T. y s.s. y 211 del C.G. del P.) y según las reglas de la sana crítica, supone que no hay garantía de objetividad del testimonio y por ende de credibilidad.

Igualmente aduce que frente a la pretensión de los demandantes para que sea impuesta la sanción de mora del artículo 65 del C.S.T. modificada en la ley 789 de 2002 artículo 29, es necesario conocer que ésta no se impone de forma inexorable y automática, cada que se declara una relación laboral, por lo que es necesario conocer el acogimiento del demandado al derecho que lo rige al celebrar ese contrato, el cumplimiento de las obligaciones en su vigencia, para concluir que no existe un acto contrario a la buena fe contractual.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**



Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

## **2.2.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si entre los demandantes y la sociedad accionada existió un contrato civil de suministro de transporte y en consecuencia es procedente revocar la sentencia de primera instancia, proferida por la Juez Segunda Laboral del Circuito de Itagüí, para en su lugar absolver de las pretensiones a Industrias Médicas Sampedro S.A.S.?

Si, por el contrario, existió una verdadera relación laboral, regida por un contrato de trabajo, dilucidar:

¿Si para establecer el salario devengado por los accionantes es posible tener en cuenta los extractos bancarios aportados por los mismos al plenario?

¿Si se causaron las sanciones moratorias del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo y del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990?

¿Si el codemandante Jonathan Andrey Jiménez Correa, fue despedido sin justa causa y tiene derecho al pago de la indemnización prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo?

### **2.3.- TESIS**

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual i) entre las partes existió un contrato de trabajo, toda vez que la parte accionante no logró desvirtuar la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo. ii) los pagos realizados por la demandada y de los cuales dan cuenta los extractos bancarios emitidos por Bancolombia S.A. pueden ser valorados como prueba de la remuneración o el salario, excluyendo las cuentas de cobro y los extractos emitidos por Davivienda S.A. en relación con el señor John Bayron Bedoya, que no dan certeza del pago por parte de la sociedad accionada iii) la demandada no acreditó que su actuar estuviese justificado en una causa razonable, plausible o atendible constitutiva de buena fe, causándose la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, iv) no se acredita el hecho del despido del señor Jonathan Andrey Jiménez, no causándose la indemnización por despido sin justa causa, en consecuencia la sentencia debe ser MODIFICADA en el numeral primero, en cuanto a los valores de las acreencias laborales a reconocer a cada uno de los accionantes; en el numeral tercero, en cuanto a los salarios a tener en cuenta para el reajuste de los aportes a seguridad social en pensiones y REVOCADA PARCIALMENTE en el numeral segundo en cuanto ordenó la indexación de las condenas, en lo que respecta a las prestaciones sociales y en el numeral cuarto en cuanto absolvió de las sanciones moratorias.

### **5.- PREMISAS NORMATIVAS**

En el derecho del trabajo rige el principio de primacía de la realidad sobre las formas elegidas por las partes en las relaciones de trabajo, como una garantía de respeto a derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores subordinados.

Sobre el alcance de tal principio, es pertinente traer a colación la sentencia del 8 de marzo del 2017, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, radicado SL4027-2017 (45344), MP Gerardo Botero Zuluaga, en la cual se recordó que “el

*principio de la primacía de la realidad, consiste en darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resulte del documento contractual o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, por lo que son aquellas particularidades que se extraen de la realidad, las que se deben tener en cuenta, a fin de determinar el convencimiento del juez con respecto a los servicios prestados por una persona natural y que se reclaman en una acción judicial, que configuren un contrato de trabajo.”*

Conforme al artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, son tres los elementos que permiten la configuración de un contrato de trabajo, el primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, el segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato, y el tercer elemento, el salario como retribución del servicio.

Dado el carácter tuitivo del derecho laboral, el artículo 24 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, consagra una presunción legal del elemento subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio:

*“ARTICULO 24. PRESUNCIÓN. Modificado por el art. 2, Ley 50 de 1990. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”*

Frente a dicha presunción, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, tiene jurisprudencia pacífica, en cuanto a cómo se distribuyen las responsabilidades probatorias, criterio expuesto entre otras, en la sentencia SL39259 del 17 de abril de 2013:

*“Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario*

*Por esa razón, como con acierto lo argumenta el recurrente, en ningún caso quien presta un servicio está obligado a probar que lo hizo bajo continuada dependencia y subordinación para que la relación surgida pueda entenderse gobernada por un contrato de trabajo”. (Subraya extratexto)*

Y reiterado en las sentencias SL4027 del 08 de marzo de 2017 (45344), MP Gerardo Botero Zuluaga y SL 53801 del 21 de febrero de 2018 M.P. Jorge Mauricio Burgos.

Lo anterior no se opone a reconocer, como también lo ha adocinado de tiempo atrás la citada Corporación, que en los contratos de naturaleza eminentemente civil o comercial también existen instrucciones y parámetros establecidos por el contratante para la prestación del servicio.

En efecto en la sentencia SL Radicado 15319 del 04 de mayo de 2001, se sostuvo:

*“Tampoco se desprende de la cláusula cuarta la pretendida subordinación por allí habersele exigido al contratista aceptar de la interventoría sus instrucciones, recomendaciones, sugerencias y orientaciones, toda vez que dicha exigencia no es exclusiva del contrato de trabajo, pues no debe olvidarse que todo contrato comporta obligaciones, cuyo cumplimiento no implica la subordinación de la parte que se obliga frente a la otra que le exige su cumplimiento.”*

Sin embargo, cuando se acredita que la prestación del servicio se cumplió bajo subordinación permanente que va más allá de las instrucciones propias de cualquier contrato, compete al fallador declarar la relación de trabajo, así lo recordó también la Sala Laboral de la citada Corporación, en sentencia SL 663 de 2022

*“No es equivocado, entonces, pensar que el poder sancionatorio de la empresa reflejaba en buena parte el carácter subordinado de la relación, pues la esencia del nexo se define por la manera en que en la práctica se desenvolvió, esto es, cómo se cumplieron los servicios, pues el principio de la primacía de la realidad sobre las formas implica que, pese a la denominación que las partes le den, en caso de tener las características propias del contrato de trabajo, este debe ser reconocido.*

*Esa ha sido la postura pacífica y uniforme de esta Sala, que en sentencias tales como la CSJ SL3351-2020, expresó:*

*Además, en este caso, habiendo quedado indiscutido en las instancias, como lo es ahora en el recurso extraordinario, que la actora le prestó sus servicios personales a la demandada de manera continuada e, inclusive, estando acreditado que por tales servicios percibía una remuneración que en su momento*

*llamaron «honorarios», al Tribunal le competía arribar a la única conclusión probatoria posible, esto es, que había de presumirse que la relación jurídica de las partes era en verdad de naturaleza contractual laboral, no siendo de recibo las alegaciones de la recurrente en las que se contrae a expresar que lo que se pactó entre aquellas fue la suscripción de un contrato de prestación de servicios, olvidando que el juez laboral debe desatender el simple rótulo formal o aparente que se le asigne a los contratos y los documentos que oculten la relación de servicio personal subordinado con nombres o menciones propias de otros contratos, como lo ha enseñado esta Sala de la Corte de tiempo atrás, verbigracia, en la sentencia CSJ, SL 16 mar. 2005, rad. 23987.”*

## **2.6.- CASO CONCRETO**

### ***2.6.1. Existencia de la Relación de Trabajo***

En el sublite, está demostrado que la sociedad accionada, suscribió con los accionantes John Bayron Bedoya Mejía y Jonathan Andrey Jiménez Correa, contratos denominados “*contrato civil de prestación de servicios*”, el 21 de diciembre de 2015 y el 04 de abril de 2016, respectivamente, asimismo celebró con el señor Juan Guillermo Posada Llano un contrato de “*suministro de transporte*” el 01 de septiembre de 2017, documental obrante en el archivo 15.Pruebas Contestación-2020-0145.

Es de advertir que respecto al señor Posada Llano, la sociedad llamada a juicio, acepta como cierto que el extremo inicial del vínculo lo es el 10 de diciembre de 2016, observándose pagos como proveedor desde el 21 de abril de 2017 (documento 02. Demanda.Anexos pdf folios 38), sin que obre en el expediente copia de contrato existente entre la referida data y el 01 de septiembre de 2017.

Igualmente, la parte demandada a través de su apoderado judicial al dar respuesta a la demanda asintió la existencia del vínculo contractual con los gestores del proceso, respecto los cuales niega la existencia de la subordinación especial y propia de los contratos de trabajo.

En este contexto está establecida la prestación personal del servicio, premisa fáctica que activa en favor de los demandantes la presunción de subordinación, como acertadamente lo concluyó la a quo. Incumbe por lo tanto establecer si tal presunción fue desvirtuada por la demandada.

Sea lo primero señalar, que las empresas puedan libremente celebrar contratos de naturaleza civil o comercial con personas naturales o jurídicas para la ejecución de tareas o la prestación de servicios en actividades inherentes a su objeto social y que, por definición, todo contrato bilateral crea obligaciones para ambas partes.

En los interrogatorios de parte practicados a los pretensores, los mismos exponen que suscribieron un contrato de transporte, en virtud del cual debían entregar los materiales quirúrgicos de osteosíntesis comercializados por la pasiva, a las distintas instituciones médicas, a cambio de un pago, que fue determinado en valor hora, que se cancelaba mes vencido, previa cuenta de cobro a la cual debían anexar las planillas de pagos al sistema integral de seguridad social.

También admitieron, que el vehículo en el cual se cumplía la actividad de transporte era de su propiedad y que a su cargo se encontraban todos los gastos del automotor, tales como el pago del seguro, impuestos, rodamiento, mantenimiento y gasolina, incurriendo así en prueba de confesión, en los términos del artículo 191 del Código General del Proceso, por ser la propiedad de la herramienta de trabajo un elemento que, en principio, desvirtúa una verdadera relación laboral.

El contrato de transporte, que invoca el empleador está definido en el artículo 981 del Código de Comercio, en los siguientes términos:

***ARTICULO 981.*** *El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario. El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales.*

Y el contrato de suministro según las voces del artículo 980 del mismo estatuto *“es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios.”*

En concordancia con lo anterior el contrato de suministro de transporte, es aquel mediante el cual se contrata el servicio de transporte en forma periódica o continuada.

En el caso subexamine, se advierte que la denominación del contrato de suministro de transporte solo se adoptó en el caso del señor Juan Guillermo Posada Llano, pues respecto a los demás codemandante se acudió al contrato civil de prestación de servicios, cuyo objeto era igualmente el servicio de transporte de material quirúrgico.

En todo caso, al contrato de transporte o de prestación de servicios de transporte no son ajenas las recomendaciones e instrucciones que imparte el contratante para garantizar la adecuada prestación del servicio contratado, sin ello afecte la autonomía e independencia del contratista como lo tiene establecido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

*“Sentado lo anterior, debe decirse que de la premencionada cláusula primera no se desprende la “subordinación laboral inequívoca”, en que se funda el ataque para establecer el error evidente de hecho que denuncia.*

*Ciertamente, se duele el recurrente de que la autonomía del demandante se redujo ostensiblemente a consecuencia de que se le exigió que personalmente condujera su vehículo y que si deseaba designar un reemplazo debía avisar con 15 días de anticipación. Dichos argumentos no dicen de la mentada subordinación sino, más bien, de la prestación personal del servicio, elemento diferente del contrato de trabajo y que tampoco se da en forma absoluta, en el contrato que se estudia, pues le era permitido al demandante designar su reemplazo avisando a la empresa con 15 días de anticipación, lo que no implica un recorte en su autonomía en forma tal que refleje una subordinación y menos del tipo laboral.”* (sentencia SL Radicado 15319 del 04 de mayo de 2001).

Ahora para delimitar la subordinación de carácter laboral, es necesario verificar

las condiciones en que se ejecutó el contrato, para este efecto la jurisprudencia (sentencia SL1439 de 2021), resalta el valor a prueba indiciaria, en los siguientes términos:

*«1.2. Los “indicios” de determinación de la relación de trabajo subordinada. Una mención especial al criterio de la integración en la organización de la empresa (Recomendación n.º 198 de la OIT) En aras de determinar la existencia de una relación de trabajo subordinada, es bien conocida la técnica del haz de indicios, es decir, criterios que reflejan los rasgos más comunes de un vínculo laboral dependiente. Se trata de recabar, analizar y sopesar datos fácticos relevantes que denoten el ejercicio de facultades empresariales de organización, dirección y control de las condiciones de trabajo. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo enuncia algunos de estos indicios, tales como el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y la imposición de reglamentos. No obstante, esta mención normativa tiene el carácter enunciativa y no taxativa, de modo que pueden existir otros indicios o elementos objetivos que permitan deducir una relación de trabajo subordinada. Si, como atrás se afirmó, el poder de dirección y control que desemboca en subordinación es la razón de ser del contrato laboral, este poder puede manifestarse de diversas formas, según los usos, técnicas o tecnologías que el empresario utilice para alcanzar sus fines lucrativos e, incluso, según las épocas en que se ejerza esta facultad.*

*La Sala Laboral ha identificado algunos indicios relacionados en la Recomendación n.º 198 de la OIT que, sin olvidar su carácter relativo o circunstancial, no exhaustivo y dinámico, pueden ser útiles para descifrar una relación de trabajo subordinada. De esta forma, ha considerado como tales la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona (CSJ SL4479-2020); la exclusividad (CSJ SL460-2021); la disponibilidad del trabajador (CSJ SL2585-2019); la concesión de vacaciones (CSJ SL6621-2017); la aplicación de sanciones disciplinarias (CSJ SL2555-2015); cierta continuidad del trabajo (CSJ SL981-2019); el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo (CSJ SL981-2019); realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el del beneficiario del servicio (CSJ SL4344-2020); el suministro de herramientas y materiales (CSJ SL981-2019); el hecho de que exista un solo beneficiario de los servicios (CSJ SL4479-2020); el desempeño de un cargo en la estructura empresarial (SL, 24 ag. 2010, rad. 34393); la terminación libre del contrato (CSJ SL6621-2017) y la integración del trabajador en la organización de la empresa (CSJ SL4479-2020 y CSJ SL5042-2020)»*

En el sublite no hay duda de la integración del trabajador en la organización de la empresa, dado que la accionada Industrias Medicas Sampedro S.A.S. tiene como



actividades propias de su negocio la *“producción, elaboración, distribución, venta, exportación de sistemas de fijación ósea, implantes craneofaciales, dispositivos médicos y odontológicos, y, en general, cualquier actividad lícita tanto en Colombia como en el extranjero”*, consecuentemente el servicio de transporte en la distribución de los dispositivos médicos es una tarea esencial en el giro ordinario de su negocio.

De acuerdo con el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, son admisibles los modelos de tercerización laboral, outsourcing o externalización, respecto a contratistas independientes, modalidades que han sido admitidas como un medio legítimo de encargo a terceros de determinadas partes u operaciones del proceso productivo. Así lo ha admitido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en las sentencias SL 3001 del 05 de agosto de 2020 y SL 81104 del 04 de noviembre de 2020.

De tal manera que, para acreditar la calidad de contratistas independientes de los accionantes, debe demostrarse que asumieron los riesgos de la labor que se le encomienda, que la actividad la realizaron con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica. (véase sentencia SL 2667 del 27 de julio de 2020)

Descendiendo al caso concreto, se tiene que si bien está acreditado que los demandante eran propietarios del vehículo y asumían los riesgos del rodante, no se establece la libertad y autonomía en el desarrollo de la actividad, pues la declaración jurada de los señores Camilo Villa Gónima y Yeison Andrés Vélez, compañeros de labor de los demandantes, acredita la existencia de una subordinación que va más allá de la coordinación propia de un contrato civil o comercial, en tanto coinciden en afirmar que los accionantes, debían cumplir horario, el primero declaró *“había tres turnos, uno por la mañana 530 de la mañana, otro a las 11.00 de la mañana y otro a las 100, siempre nos hacían cumplir el horario, el turno que nos tocaba semanalmente”* anota que en ese turno *“no podían retirarse de la compañía había que volver a la empresa y reportarse cada 20 minutos, ese tiempo lo llamaban de playa, a uno le tocaba quedarse no se podía ir para la casa, pero igualmente ese tiempo no lo pagaban.”* Asegura que, además, debían *“prestar una disponibilidad al mes, las 24 horas del día toda una semana, los fines de semana dos personas trabajaban la disponibilidad y en semana al que le tocaba la disponibilidad también lo hacía”*. Finalmente anota que en *“la*

*puerta entrada pusieron una huella digital, para que cada vez que entráramos o saliéramos quedara registrada, era para todos los que laboraban alla.”*

Y el segundo testigo, a este respecto, expuso *“nosotros nos hacían un cuadro de turnos de cada mes y nosotros ya sabíamos que turno nos tocaban- si uno no podía le pedían a uno excusa, una excusa médica o algo “. También declaró sobre la disponibilidad, “hacíamos disponibilidad los fines de semanas y algunas veces en semana y esa disponibilidad nos la pagaban también, era que teníamos que estar 24 horas disponibles para las llamadas para que lo que ellos necesitaran”,*

Expresó el señor Diez que los accionantes recibían órdenes de los señores Oscar de la Cruz, Camilo Restrepo, Jonathan Tamayo, Daniel Restrepo y durante el turno a través de WhatsApp, que eran sancionados con suspensión porque entregaban un material mal o lo entregaban en otra Clínica y se les imponía multas económicas entre \$8.000 y \$48.000. Por su parte el señor Villa Gónima sostuvo que John Bayron y Juan Guillermo fueron sancionados *“me acuerdo de Juan Guillermo que lo despacharon con unos equipos hubo un error en la entrega de equipos y por ese error lo suspendieron cinco días.”*

Agregan los deponentes que a los transportadores les hacían llamados de atención por la presentación personal, que debían asistir con camisa de cuello, manga corta o larga y no podían usar jeans con rotos, que debían pedir permiso para no asistir y presentar excusa médica y que también se les ordenaba participar en la elaboración del inventario de los equipos.

Respecto al codemandante Jonathan Andrey Jiménez Correa, afirmaron que incluso se le asignó otra actividad dentro de la empresa como lo es la de organizar el material y despachar los elementos, actividad que según aseguró el señor Camilo Villa Gónima, realizó durante un año.

Pues bien, el único testigo de la demandada Daniel Dario Restrepo Muñoz, Jefe Nacional de Despachos, declaró en sentido contrario, que los demandantes

prestaron el servicio de transporte a la empresa, se encargaban de entregar y recoger material de las instituciones, lo cual hacían según su disponibilidad, en tanto tenían otras vueltas que hacer o trabajaban para otras personas, teniendo la sociedad una base de datos con más personal para hacer esa labor, a quienes podía contactar si uno de los demandantes no podía hacerlo, agregó, en otras de sus respuestas, que los demandantes no tenían turnos de disponibilidad, no se les imponía sanciones ni exigía el uso de ningún tipo de ropa.

No obstante, refiere que tenía poco contacto con los accionantes, por ser el Director Nacional de Despachos, teniendo éstos mayor cercanía con los auxiliares de Despacho y el coordinador logístico, señor Oscar de la Cruz, expresando que no tiene conocimiento del contrato suscrito con los transportadores demandantes, si debían cumplir turnos u horarios, si eran contactados por whatsapp, si el señor Juan Guillermo Posada fue sancionado, si se asignaron funciones de organización y despacho de material quirúrgico al señor Jonathan Jiménez, tampoco sabe si a los transportadores se les hacía alguna clase de calificación, declarando que los demandantes si ayudaban en la elaboración del inventario pero solo el anual.

De manera que, si bien para la Sala, no se puede desconocer que los testigos de los accionantes, tienen interés en acreditar la naturaleza laboral del vínculo, la cual alegan en su favor en procesos análogos, situación que sustentó la tacha de sospecha formulada por la parte demandada desde la réplica a la demanda, lo cierto es que no hay prueba que desvirtúe sus dichos y aunque se negara valor probatorio a la prueba testimonial de la activa, el resultado sería el mismo, en tanto la prueba allegada por la parte accionada es insuficiente para desvirtuar la presunción de subordinación del artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo.

Sumado a ello, la evidencia documental resulta concordante con el ejercicio de la subordinación, pues a folio 231 del *documento 02. Anexos Demanda. Pdf*, el señor John Byron Bedoya Mejía, aportó una planilla de turnos correspondiente al mes de noviembre de 2018, en la cual se relacionan los transportadores y se asignan tres turnos: mañana, intermedio y tarde, para las semanas del 03 al 09, del 10 al 16, del 17 al 23, del 24 al 30 y del 31 al 07, con el cual se revalida la afirmación de

los testigos de los demandantes en cuanto a los horarios y turnos establecidos por la empresa.

Se aportó a folios 224 a 231 del *documento 02. Anexos Demanda. Pdf*, cuadros de distribución de rutas de las cuales, si bien no se puede extraer información precisa sobre las fechas en que fueron elaborado, si dan cuenta que la contratante Industrias Médicas Sampedro S.A.S., era quien tenía la dirección y control de la actividad de transporte.

También se glosó al expediente digital el comprobante de egreso 50752 de diciembre de 2018, carpeta 15. *Pruebas Contestación*, aportado por la accionada, en el cual se relaciona en los servicios a pagar, turnos de disponibilidad del codemandante John Bayron Bedoya, los días 11 y 12 de diciembre de la citada anualidad, de donde se extrae que, en efecto, los actores cumplían también turnos de disponibilidad.

En esta misma dirección, en el contrato de transporte suscrito con el señor Juan Guillermo Posada el 01 de septiembre de 2017, que milita en la misma carpeta, se lee en la cláusula tercera como obligaciones del contratista: “2. *Estar disponible 24 horas...* 4- *Tener siempre a disposición del contratante el vehículo que presta el servicio ...15- Dirigir personalmente las labores y no subcontratar...*”, exigencias que claramente denotan subordinación.

Igualmente, a folios 93 ibidem, se aporta “*Formato de Evaluación y Revaluación de Proveedores*”, del señor Juan Guillermo Posada Llano, firmada por el señor Daniel Restrepo Muñoz, relativo al periodo 01 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018, en el cual se le califica los siguientes ítems: - Presentación Personal 10%; - Puntualidad 20%; -Calidad 30%; -Actitud de servicio 30%; -Estado del vehículo 10%, de donde se desprende que la sociedad accionada si realizaba evaluación y calificación a los transportadores.

En suma, se acredita que la ejecución del contrato no se cumplió en forma autónoma e independiente dado que la prueba documental aportada determina que estuvo marcada por el cumplimiento de horario, turnos de disponibilidad,

control y calificación del servicio y los testigos de la parte actora dan cuenta de la existencia de órdenes permanentes, control de ingreso, sanciones e incluso la asignación de funciones ajenas al contrato como la elaboración de inventario anual o la organización y despacho de equipos que se afirma cumplió el señor Johh Bayron Bedoya, por más de un año; razones que llevan a la Sala a confirmar la declaratoria del contrato realidad.

### **2.6.2. Salarios**

Expresa disenso el apoderado de la pasiva en relación con el valor probatorio que se dio a los extractos bancarios y cuentas de cobro aportados al proceso, para determinar los salarios de los accionantes, dado que a su juicio son documentos en blanco para lo cual se requería el reconocimiento de la accionada.

Frente a este punto debe señalarse que no se equivocó la a quo al dar probatorio a los extractos bancarios emitidos por Bancolombia S.A. respecto a los demandantes, toda vez que allí se certifica los pagos que se realizaron mes a mes bajo el concepto “*Pago de Prov IND MEDICS SAMP*” documentos que se presumen auténticos al ser expedidos por una entidad bancaria, vigilada por la Superfinanciera, sin que, respecto a esta prueba, la parte demandada, presentara desconocimiento o tacha de falsedad.

En este sentido artículo 769 del estatuto tributario señala que los certificados bancarios tienen el valor de copia auténtica con fecha cierta «*Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del Estado y versan sobre hechos que aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o que consten en documentos de sus archivos.*»

En lo que si le asiste razón al apoderado de la persona jurídica accionada es en que no podía asignarse valor probatorio a las cuentas de cobro, de folios 73 a 92 y 259 a 267 del *documento 02. Demanda Anexos.pdf*, en tanto no están firmadas por la accionada ni tienen sello de recibido.

Además. debe precisarse, que respecto al señor Juan Guillermo Posada Llano, en los extractos bancarios obrantes a folios 38 a 51 del documento 02. *Anexos Demanda. Pdf*, no se acreditan los salarios devengados de enero a marzo de 2017, por lo que deben promediarse con base en el salario mínimo legal.

En relación con el codemandante John Bayron Bedoya, se aportaron lo extractos bancarios de Davivienda S.A. correspondientes a los años 2016, 2017 y enero a junio de 2018, donde no se encuentra categorizado el pago, pues los valores que fueron tomados por la a quo, corresponde a consignación “*Abono Bco Bancolombia 0000000811032919*” no existiendo medio probatorio alguno que determine que el número pertenece a la cuenta de la sociedad accionada y si bien son los únicos ingresos mensuales percibidos por este accionante, no puede inferirse de ello la titularidad de la cuenta de Inversiones Médicas Sampedro, razón por la cual en esos periodos también debe tenerse como salario, el mínimo legal mensual. Es de anotar, además, que respecto al señor Bedoya, a folios 106 y 154 del documento 02, se aportan las planillas de pago al sistema de seguridad social algunas con registro de cotizaciones sobre salarios superiores al mínimo legal, no obstante, no pueden ser tenidos en cuenta porque los aportes se hicieron a través de terceros que se reputan empleadores como lo son Gestiones AYR S.A.S., AYR S.A.S., Yuveny Otalvaro González y Gestión Especializada Mejía S.A.S.

Y finalmente, en cuanto al señor Jonathan Andrey Jiménez Correa no se acreditan los salarios de mayo y diciembre de 2016, dado que los tomados por el Juzgado corresponden al 2018 y en los meses de octubre y noviembre de la misma anualidad, aparece un pago a proveedores que no se identifica como efectuado por la sociedad accionada y por lo tanto tampoco puede ser incluido en el promedio devengado. Asimismo, el Juzgado no incluyó los salarios de agosto y mayo de 2017, pagos provenientes de la accionada que aparecen certificados en los extractos bancarios a folios 277 y 278.

Así las cosas, realizada por la Sala la liquidación del promedio salarial anual se obtiene los siguientes salarios, sobre los cuales deben liquidarse los conceptos prestaciones a cancelar y los reajustes ordenados por la a quo al sistema de seguridad social en pensiones.

*Juan Guillermo Posada Llano*

*Extremos: 10 de diciembre de 2016 al 21 de diciembre de 2018*

*Reclamación: 14 de enero de 2020 (folio 95 documento 02)*

*Prescripción: 14 de enero de 2017*

***Cuadro No. 1 -Salarios***

	2016	Folio	2017	Folio	2018	Folio
Enero			737.717		3.197.482	44
Febrero			737.717		2.056.000	44
Marzo			737.717		3.308.428	45
Abril			3.003.528	38	2.585.162	46
Mayo			2.780.514	38	3.302.043	46
Junio			2.990.196	39	2.869.948	47
Julio			2.648.052	40	2.784.953	48
Agosto			2.826.525	40	3.476.656	48
Septiembre			3.083.305	41	2.816.374	49
Octubre			3.090.780	43	3.340.173	50
Noviembre			3.110.260	43	2.826.378	51
Diciembre	689.455		3.684.791	42	2.920.932	51
PROMEDIO	<b>689.455</b>		<b>2.452.591</b>		<b>2.443.165</b>	

En consecuencia, los valores a reconocer corresponden:

***Cuadro No. 2- Conceptos adeudados***

Concepto	2016	2017	2018	TOTAL
Cesantías	40.218	2.452.591	2.382.085	4.874.894
Intereses a las cesantías		270.521	274.367	544.888
Sanción intereses a las cesantías				544.888
Primas de servicios		2.363.483	2.382.085	4.745.568
Vacaciones		1.181.741	1.191.042	2.372.783
Indemnización por despido injusto (50.61 días)				4.121.619

*John Bayrón Bedoya Mejía*

*Extremos: 03 de diciembre de 2015 al 21 de diciembre de 2018*

*Reclamación: 14 de enero de 2020 (folio 209 documento 02)*

*Prescripción: 14 de enero de 2017*

**Cuadro No. 3 -Salarios**

	2015	Folio	2016	Folio	2017	Folio	2018	Folio
Enero			689.455		737.717		781.242	
Febrero			689.455		737.717		781.242	
Marzo			689.455		737.717		781.242	
Abril			689.455		737.717		781.242	
Mayo			689.455		737.717		781.242	
Junio			689.455		737.717		2.768.619	196
Julio			689.455		737.717		2.468.072	198
Agosto			689.455		737.717		2.855.214	199
Septiembre			689.455		737.717		3.200.520	201
Octubre			689.455		737.717		2.862.774	207
Noviembre			689.455		737.717		2.903.036	204
Diciembre	644.350		689.455		737.717		2.946.502	206
<b>PROMEDIO</b>			<b>689.455</b>		<b>737.717</b>		<b>1.992.578</b>	

**Cuadro No. 4 –Conceptos adeudados**

Concepto	2015	2016	2017	2018	Total
Cesantías	17.793	689.455	737.717	1.942.763	3.387.728
Intereses a las cesantías			83.362	227.303	310.665
Intereses a las cesantías			83.362	227.303	310.665
Primas de servicios			732.796	1.894.192	2.626.988
Vacaciones			366.398	947.096	1.313.494
Indemnización por despido injusto (71 días)					4.715.767

**Jonathan Andrey Jiménez Correa**

*Extremos: 04 de abril de 2016 al 19 de diciembre de 2018*

*Reclamación: 24 de enero de 2020 (folio 306 documento 02)*

*Prescripción: 24 de enero de 2017*



**Cuadro No 5 -Salarios**

	2016		2017		2018	
Enero			3.144.032	280	1.838.200	288
Febrero			1.737.176	280	2.395.470	288
			1.228.613			
Marzo			3.045.626	281	2.378.867	286
Abril	2.047.815	287	2.755.229	278	781.242	
Mayo	689.455	278	1.921.461	279	1.938.260	297
Junio	2.358.744	287	3.029.918		2.345.652	289
Julio	1.067.814	284	3.036.211	277	1.993.837	290
	2.084.008					
Agosto	2.509.325	284	1.619.442		1.949.942	291
Septiembre	2,627.245	285	2.482.326	276	2.284.497	291
	1.092.233					
Octubre	689.455		2.495.865	273	2.524.563	292
Noviembre	689.455		2.004.985	274	2.512.020	293
Diciembre	689.455		1.000.000	274	2.834.828	293
			2.217.617			
PROMEDIO	<b>1.949.444</b>		<b>2.643.208</b>		<b>2.148.114</b>	

**Cuadro No 6 –Conceptos adeudados**

Concepto	2016	2017	2018	TOTAL
Cesantías	1.445.837	2.643.208	2.076.510	5.598.857
Intereses a las cesantías		291.281	240.875	532.156
Sanción intereses a las cesantías		291.281	240.875	532.156
Primas de servicios		2.474.042	2.012.830	3.480.457
Vacaciones		1.237.021	1.006.415	2.243.436

Como consecuencia de lo expuesto, debe modificarse el numeral primero del fallo estudiado en apelación, en cuanto al valor de las condenas y el numeral tercero en cuanto a la orden de reajustar los aportes al sistema de seguridad social, los cuales se cumplirán con respecto al mayor valor de los salarios establecidos en este fallo.

***2.6.2. Indemnización por despido injusto del señor Jonathan Andrey Jiménez***

En cuanto a la carga de la prueba en esta pretensión, tal y como lo señaló la falladora de primer grado, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de tiempo atrás, ha establecido de manera reiterada y pacífica que compete al trabajador acreditar el despido y al empleador demostrar las justas causas que soportan dicha determinación, véase, entre otras, sentencia SL, radicado 32568 del 29 de julio de 2008.

En este caso no se allegó prueba documental del despido del señor Jiménez, a diferencia de los demás accionantes, tampoco la prueba testimonial da cuenta de la decisión unilateral de la pasiva de terminar el contrato y en este sentido no puede condenarse al pago de la indemnización por despido injusto pretendida. Nótese además que se afirma que el contrato terminó el 19 de diciembre de 2018, esto es en una fecha anterior a aquella en que feneció el contrato con los demás pretensores.

Se puntualiza que en el interrogatorio de parte no existe prueba de confesión respecto al despido, ni de la contestación de la demanda puede inferirse tal aceptación, dado que el apoderado manifestó específicamente respecto al despido de este contratista *“No se acepta, indicando que lo que no existe, no se termina, y el vínculo jurídico de suministro de transporte, finalizó por acusa (sic) legal en los términos de la cláusula undécima del texto escrito en el contrato comercial de transporte.”*

Lo anterior conduce a la Sala a confirmar en este punto la sentencia primigenia.

### ***2.6.3. Sanción Moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo y del numeral 3 de la Ley 50 de 1990.***

El no pago de los salarios y prestaciones sociales al trabajador, fue calificado por el legislador, como una conducta merecedora de sanción. Es así como el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, dispone:

*“Artículo 65. Indemnización por falta de pago:*

*1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.*

*Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adendadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”.*

En derredor del tema, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que la sanción por el retardo en el pago de salarios y prestaciones sociales del trabajador no es de aplicación automática, en este sentido, en sentencia SL1451 del 25 de abril de 2018, recordó *“La Corte en desarrollo de su función de interpretar las normas del trabajo y crear jurisprudencia, ha sostenido que la sanción moratoria no es automática. Para su aplicación el juez debe constatar si el demandado suministró elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe (SL8216-2016).”*

En esta misma dirección en relación con la aplicación del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL5716 de 2018 y SL 3858 del 06 de octubre de 2020, ha adoctrinado que la misma no es automática:

*“Ahora, como se dijo en precedencia, tal sanción moratoria surge con el incumplimiento del empleador de consignar las cesantías dentro del plazo fijado por el legislador, por lo que la misma goza de una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal, su imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos que guiaron el proceder de la demandada.*

*Significa lo anterior que para la aplicación de esta sanción el sentenciador debe analizar en cada caso si la conducta del empleador estuvo justificada con argumentos que, pese a no resultar viables o jurídicamente acertados, sí puedan considerarse atendibles y justificables, en la medida en que, razonablemente, lo hubiesen llevado al convencimiento de que nada adendaba a su trabajador, lo cual, de acreditarse, conlleva ubicar el actuar del obligado en el terreno de la buena fe” (SL 3858 de 2020).*

En esta perspectiva lo que debe probarse en el proceso es la buena fe que exonere de la sanción legal y no la mala fe, por ende, quien tiene la carga probatoria de probar el hecho, es, sin duda, el empleador, así lo dejó sentado la Corporación en cita, desde la sentencia SL, Radicación 32529 de 2009, así:

*“De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el dispensador de justicia concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe. Se equivoca por tanto el recurrente cuando, al inicio del cargo, afirma que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la indemnización moratoria “... requiere que quien la aduce demuestre una conducta torticera de empleador para perjudicar al trabajador”, porque, como ha quedado visto, por el contrario, quien debe demostrar que su conducta estuvo revestida de buena fe es el empleador; mientras que al trabajador le basta probar la omisión o el retardo en el pago de los derechos laborales que da lugar a la sanción”.*

Lo anterior resulta razonable, además, habida cuenta que las circunstancias constitutivas de buena fe, como lo son aquellas causas plausibles, entendibles, justificadas para no haber procedido al pago o haber realizado un pago deficitario, competen exclusivamente al empleador. Se reliva que en cada caso es necesario estudiar si el comportamiento del empleador estuvo asistido de buena fe, ya que no hay reglas absolutas que objetivamente la determinen (sentencia SL711 de 2019)

En el sub lite, para la Sala, deviene claro que el empleador no acredita ninguna razón distinta a la naturaleza comercial del contrato, sin embargo, dada las razones expuestas en esta providencia, tal argumento no tiene respaldo, por la

forma en que se ejecutó el contrato, pues el único elemento ajeno al contrato de trabajo lo constituye la propiedad del vehículo.

En virtud de lo anterior, se REVOCARÁ la absolución de la sanción moratoria y se ordenará a su pago, la cual corre los primeros veinticuatro (24) meses, a razón de un día de salario por cada día de reparto y a partir del día uno del mes veinticinco, deberá reconocerse intereses moratorios a la tasa prevista para los créditos de libre asignación liquidados sobre el valor a reconocer por concepto de prestaciones sociales, exceptuando el descanso remunerado o vacaciones.

**Cuadro 7. Sanción Moratoria artículo 65 del C.S.T.**

Demandante	Periodo	Valor
Juan Guillermo Posada Llano	Del 22 de diciembre de 2018 al 22 de diciembre de 2020	\$58.635.960
John Bayron Bedoya Mejía	Del 22 de diciembre de 2018 al 22 de diciembre de 2020	\$47.821.894
Jonathan Andrey Jiménez Correa	Del 20 de diciembre de 2018 al 20 de diciembre de 2020	\$51.554.756

En igual forma se revocará la condena por indexación de las prestaciones sociales reconocidas.

En relación con la sanción del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990-teniendo en cuenta la prescripción, la misma se causa respecto a las cesantías del año 2017, que debieron consignadas el 15 de febrero de 2018 y corren hasta la fecha de finalización del contrato.

**Cuadro 8. Sanción numeral 3 artículo 99 de la Ley 50 de 1990**

Demandante	Periodo	Valor
Juan Guillermo Posada Llano	Del 15 de febrero de 2018 al 21 de diciembre de 2018. (cesantías 2017)	\$25.016.428

John Bayron Bedoya Mejía	Del 15 de febrero de 2018 al 21 de diciembre de 2018. (cesantías 2017)	\$7.524.713
Jonathan Andrey Jiménez Correa	Del 15 de febrero de 2018 al 19 de diciembre de 2018. (cesantías 2017)	\$26.784.507

**2.6.4. Condena en costas y agencias en derecho**

Conforme al numeral 5 del artículo 365 del Código General “*En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.*”

Sin embargo, se encuentra que la condena emitida en este proceso está atada a las condenas efectivamente impuestas, razón por la cual no era procedente la condena parcial.

En cuanto al porcentaje fijado por al a quo, 7.5%, debe señalarse que las agencias en derecho solo pueden ser controvertidas mediante la apelación del auto que aprueba la liquidación de las costas procesales, como también lo advirtió el apoderado de la demandada, de conformidad con el numeral 5 del artículo 366 del Código General del Proceso.

**3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

**FALLA:**

1.- Se **MODIFICA** el numeral primero de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Itagüí, el 24 de febrero de 2022, en el proceso ordinario instaurado por los señores JUAN GUILLERMO POSADA LLANO, JOHN BAYRON BEDOYA MEJÍA y JONATHAN ANDREY JIMÉNEZ CORREA en contra de INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO S.A.S., en el sentido que los valores que deberá cancelar la demandada a cada uno de los accionantes, corresponde a los siguientes:

JUAN GUILLERMO POSADA LLANO

Concepto	Valor
Cesantías	\$4.874.894
Intereses a las cesantías	\$1.089.776
Prima de Servicios	\$4.745.568
Vacaciones	\$2.372.783
Indemnización por despido injusto	\$4.121.619

JOHN BAYRON BEDOYA MEJIA

Concepto	Valor
Cesantías	\$3.387.728
Intereses a las cesantías	\$621.330
Prima de Servicios	\$2.626.988
Vacaciones	\$1-313.494
Indemnización por despido injusto	\$4.715.767

JONATHAN ANDREY JIMÉNEZ CORREA

Concepto	Valor
Cesantías	\$5.598.857
Intereses a las cesantías	\$1.064.312
Prima de Servicios	\$3.480.457

Vacaciones	\$2.243.436
------------	-------------

2. Se **REVOCA PARCIALMENTE** el numeral segundo del fallo, en cuanto ordenó la indexación de las condenas, en lo que atañe a las prestaciones sociales.

3.- Se **MODIFICA** el numeral tercero de la sentencia, en el sentido que los salarios que deben tenerse en cuenta para efectos del reajuste de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones corresponden a los señalados en los cuadros No. 1, 3 y 5 del presente fallo.

4.- Se **REVOCA PARCIALMENTE** el numeral cuarto de la sentencia apelada en cuanto absolvió de las sanciones moratorias y en su lugar se **CONDENA** a **INEVERSIONES MEDICAS SAMPEDRO S.A.S**, al pago de las sanciones moratorias previstas en los artículos 65 del Código Sustantivo de Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, así:

Demandante	Sanción moratoria	Sanción por no consignación de cesantías
Juan Guillermo Posada Llano	\$58.635.960	\$25.016.428
John Bayron Bedoya Mejía	\$47.821.894	\$7.524.713
Jonathan Andrey Jiménez Correa	\$51.554.756	\$26.784.507

5. Se **CONFIRMA** en lo demás el fallo recurrido.

6. Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.



El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
**JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**